



PARTIDO FRENTE AMPLIO

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Abril 2026

COMITÉ CENTRAL

Período 2024 a 2026

ÍNDICE

★ Introducción -----	3
★ Primera sección: El escenario global: Un marco necesario para la acción política local -----	3
1. Una estrategia internacional para proteger a Chile y colaborar con el mundo-----	3
2. Raíces de la inestabilidad: Los factores que alimentan la incertidumbre global-----	4
3. Transformaciones en la vida cotidiana y el tejido social-----	6
4. Organizarse, superar el pesimismo y recuperar las utopías-----	7
★ Segunda sección: Balance Nacional (2019-2025) -----	8
1. Introducción y síntesis del balance del período-----	8
2. Los últimos años de la administración anterior-----	8
3. Las condiciones políticas, sociales y económicas en que asume el Gobierno del Presidente Boric-----	9
4. Los procesos constituyentes-----	10
5. Las expectativas y logros del Gobierno del Presidente Boric-----	11
6. Las debilidades del período y los desafíos pendientes-----	13
7. Balance de las elecciones 2025-----	15
★ Tercera sección: Estrategia partidaria para el período 2026-2029 -----	15
1. Caracterización del momento: Nuevo Gobierno y Configuración Política Institucional	15
2. Objetivo general del período-----	16
3. Objetivos específicos del período-----	18
I. En la dimensión política-----	18
II. En la dimensión ideológica-----	20
III. En la dimensión social-----	21
IV. En la dimensión partidaria-----	23

★ Introducción

El primer Congreso del Frente Amplio representa un hito histórico para nuestro partido unificado, constituyendo un proceso fundamental para fortalecer nuestra unidad, robustecer nuestra identidad ideológica y establecer una hoja de ruta estratégica para los años venideros. Este hito es el resultado de meses de organización por parte de compañeros y compañeras de diversos espacios del partido, tras la definición del diseño metodológico a fines del año pasado. Actualmente, el proceso entra en su fase de debate basal, donde las Unidades Congressales (UCON), conformadas en las últimas semanas, asumen la tarea central de discutir y debatir las tareas estratégicas del período entre los meses de marzo y mayo.

El presente documento constituye un aporte que el Comité Central entrega a las Unidades Congressales con el fin de orientar la discusión y ofrecer un lineamiento inicial para el debate. Este texto no es una propuesta cerrada, sino una primera síntesis de los documentos producidos por distintos espacios y liderazgos del partido entre diciembre y enero pasados, sumado a las reflexiones que el propio Comité Central ha desarrollado para responder a las preguntas de la comisión congresal. El objetivo es que este insumo sirva de base para la discusión, facilitando que el Congreso alcance la mayor profundidad posible en sus deliberaciones hacia la instancia nacional de junio.

Para facilitar este análisis, el documento se divide en tres grandes partes:

1. **Escenario Global:** Ofrece una mirada sobre los cambios geopolíticos actuales, la emergencia de la ultraderecha y los desafíos que enfrentamos en Chile y el mundo. Parte de la premisa de que el bienestar nacional está profundamente vinculado a los fenómenos que ocurren más allá de nuestras fronteras, lo que exige una comprensión clara de este contexto para abordar con eficacia.

2. **Balance Nacional (2019 - 2025):** Analiza el ciclo político reciente, abarcando desde los últimos dos años del gobierno de Sebastián Piñera hasta el término de la administración del Presidente Gabriel Boric. Esta sección examina los hitos, logros y desafíos enfrentados, de modo que lo acontecido sirva como insumo y lección para delinear el camino futuro de nuestra fuerza política.
3. **Propuesta de Estrategia 2026 - 2029:** Presenta un objetivo general centrado en la construcción de una mayoría social a favor de una agenda de cambios, junto con objetivos específicos destinados a orientar el trabajo del partido en las dimensiones política, ideológica, social y partidaria orgánica para los años que vienen.

★ Primera sección: El escenario global: Un marco necesario para la acción política local

1. Una estrategia internacional para proteger a Chile y colaborar con el mundo

Nuestra prioridad es Chile y las urgencias de quienes habitan nuestro país. Sin embargo, en un mundo interconectado, la seguridad y bienestar de las familias chilenas, así como nuestras posibilidades de desarrollo, dependen directamente de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Debemos tener una visión internacional clara para proteger nuestra soberanía, para que el costo de la vida no dependa de crisis ajenas y para aprovechar las oportunidades de la nueva economía verde y digital en beneficio de las mayorías.

Esta acción necesaria también se sostiene en una convicción profunda: la dignidad humana es un derecho universal que no se detiene en las

fronteras. Nuestros principios, como la justicia social y ambiental, el feminismo, la igualdad, la libertad y la democracia, no pierden su vigencia cuando cruzamos las fronteras. Al contrario, son dichos principios los que nos permiten navegar este escenario global con una dirección clara. No somos espectadores de la globalización, sino que nos articulamos internacionalmente porque sabemos que solo mediante la solidaridad y el esfuerzo colectivo entre pueblos podremos construir un futuro donde la incertidumbre dé paso al bienestar compartido.

Analizar el contexto global en el marco de nuestro Congreso Ideológico del Frente Amplio no es, entonces, un ejercicio académico, sino más bien una necesidad estratégica para comprender las similitudes, presiones y oportunidades que enfrenta tanto Chile como el proyecto político progresista y de izquierda alrededor del mundo.

2. Raíces de la inestabilidad: Los factores que alimentan la incertidumbre global

El escenario internacional está marcado por la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán. Este conflicto promueve la inestabilidad internacional al vulnerar los principios centrales del derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Resulta preocupante observar que estas normas sean flagrantemente desconocidas por potencias militares, debilitando el sistema multilateral e instalando una lógica de relaciones internacionales basada en la imposición de la fuerza.

Este escenario de guerra está teniendo efectos económicos directos en la economía internacional, generando un alza en el precio del petróleo, del gas natural y de los fertilizantes, productos cuya producción y distribución se han visto seriamente afectadas. Dado que Chile importa casi la totalidad de su demanda interna de petróleo y de gas, el impacto económico es considerable. Además, el conflicto también ha impactado a algunos de los principales

productores de insumos de fertilizantes, lo que puede repercutir en la producción mundial de alimentos, un efecto que probablemente se manifestará con más fuerza durante 2027.

A nivel de la OCDE, actualmente Chile encabeza el alza en el precio de los combustibles, en parte debido a la decisión del Gobierno de Kast de modificar el MEPCO y trasladar en mayor medida estas alzas a las familias. Los meses venideros podrían ser especialmente duros para las mayorías del país. En ese contexto, nuestro partido debe promover, mediante su bancada parlamentaria, alcaldes, concejales, consejeros regionales y la militancia en su conjunto, medidas que permitan enfrentar materialmente esta crisis.

Más allá de la guerra actual, el panorama contemporáneo no atraviesa una, sino múltiples crisis que se potencian constantemente. Estamos ante un entramado de desafíos simultáneos de alcance global y efectos entrelazados que requiere de una mirada integral. Entender esta complejidad acumulada es clave para ofrecer soluciones que den certeza y seguridad a las personas frente a la incertidumbre, abordando, al menos, las siguientes dimensiones:

- **Emergencia climática:** La crisis ecológica y energética ya no es una amenaza futura, sino un factor que condiciona la economía, la reproducción de la vida en el presente y la realidad material y social de las comunidades teniendo como una de sus más visibles consecuencias las migraciones masivas que están ocurriendo a nivel global, produciendo un alto impacto político en los países. Sin embargo, con un negacionismo creciente, alimentándose de discursos pseudocientíficos y teorías conspirativas como herramientas al servicio del capital, vemos con frustración un retroceso en la concientización y acciones concretas para hacer vivible la vida en nuestro planeta a una próxima generación.
- **Poder corporativo vs. Estados:** Los Estados nación enfrentan hoy un poder

nunca antes conocido por parte de las grandes empresas tecnológicas, que no solo comienzan a controlar mercados y narrativas, sino que develan las dificultades actuales de los espacios de gobernanza democrática y del sistema de organización multilateral. Desde la capacidad de operar en la ilegalidad por la fuerza de los hechos, alterar algoritmos para fomentar la polarización o fomentar sin oposición todo tipo de desinformación, lo que exacerba con los avances y relevancia que han adquirido las herramientas de Inteligencia Artificial en la vida cotidiana de la población, nos demuestra de forma explícita cómo se erosionan tanto la confianza, como la soberanía de nuestros países.

- **Geopolítica y soberanía:** El escenario global ha mutado aceleradamente, desde uno dominado por un poder hegemónico (Estados Unidos) a otro tensionado por distintos polos, incluyendo a la Unión Europea y los BRICS. Esto ubica en una posición de vulnerabilidad a América Latina, ya que sus países se ven tensionados a formar lealtades mientras sus intereses están distribuidos en ese escenario multipolar. En particular, se debe reconocer la actualización de la doctrina Monroe por parte de los EEUU, expresada en crecientes presiones políticas, electorales o económicas en países como Chile, Argentina, Honduras, Brasil, Cuba y Venezuela, entre otros.

Lo anterior, no solo problematiza la política en nuestro continente, ya que el ataque de EEUU e Israel a Iran, la invasión de Rusia en Ucrania y el genocidio perpetrado por las fuerzas militares israelíes contra el pueblo palestino en Gaza, junto con las contradictorias reacciones que desataron en la comunidad internacional, demuestran el doble estándar que convive en el ámbito del derecho internacional y señala la debilidad de las instituciones multilaterales nacidas después de la segunda guerra mundial.

- **Modelo económico internacional:** en el plano de la economía internacional, el marco de la globalización neoliberal que ha regido la relación entre países desde los años 90s ha ido mostrando signos de desgaste. Este esquema de apertura comercial y tratados de libre comercio, que muchas veces fue criticado desde el sur global por su efecto sobre el desarrollo y la soberanía de los países, hoy es asediado por liderazgos de ultraderecha que cuestionan el multilateralismo y las reglas que rigen el comercio global. Un ejemplo es la política comercial de Estados Unidos, que ha elevado aranceles, tensionado el comercio internacional y utilizado su poder económico para presionar a otros países a someterse a sus intereses estratégicos, como ocurrió con los aranceles que ha impuesto a Brasil, las presiones sobre Europa por la anexión de Groenlandia o las sanciones contra funcionarios del Gobierno de Chile. En este contexto, la creciente gravitación de las economías de China e India abre para economías emergentes un nuevo campo de disputa, planteando a países como Chile el desafío de definir su inserción internacional en el nuevo marco económico que se abre, construyendo alianzas regionales y globales que permitan resguardar nuestra soberanía e independencia como país.
- **Crisis políticas y desplazamientos humanos:** El agravamiento de crisis sociales y políticas agudas en diversos países ha desencadenado procesos migratorios masivos a escalas pocas veces vista. Estos flujos no solo implican un dolor humano profundo para las familias que se ven forzadas a desprenderse de sus lugares de origen buscando seguridad, sino que impactan de forma directa en la convivencia social y en las capacidades de los Estados de llegada. En un continente interconectado, la incertidumbre e inestabilidad interna de cada país se convierte rápidamente en un problema compartido que afecta la seguridad y el bienestar de la región completa, haciendo que la crisis migratoria

sea un desafío de gestión estatal y de urgencia diplomática.

- **Debilitamiento institucional y ascenso de autoritarismos:** La incapacidad de diversos gobiernos, en el marco de democracias liberales, para responder a las demandas ciudadanas en momentos de altas expectativas compartidas y descontento generalizado, ha abierto una ventana para la emergencia de movimientos de ultraderecha que se anclan al mismo tiempo en el populismo nacionalista y en la coordinación global de narrativas. Añorar un pasado mejor, con valores tradicionales y conservadores, sembrar la sospecha sobre la ciencia, culpar de todo mal a la izquierda, a la migración, al aparato estatal o al globalismo, además de anclarse en símbolos patrios, ha sido parte de una receta ha permitido la emergencia de una ultraderecha a nivel global, capitalizando y politizando el malestar social.
- **Crimen organizado y narcotráfico internacional:** La globalización y las nuevas tecnologías no solo ha traído la expansión de las redes legales de comercio, sino también la expansión de grandes organizaciones criminales que utilizan las debilidades de los Estados para controlar territorios, comprar instituciones y ofrecer una vía aparentemente fácil y rápida de ascenso social y lujo a millones de personas que no encuentran camino en la institucionalidad vigente o han visto incumplidas las promesas de bienestar social.

3. Transformaciones en la vida cotidiana y el tejido social

Estas transformaciones globales también están modificando la forma en que las personas vivimos, nos relacionamos y percibimos el tiempo. La experiencia digital, debido a su capacidad de conexión global y respuesta rápida, ha construido una cultura de la aceleración y la inmediatez que contrasta con lo

que era la vida humana hasta hace solo unos años. Esta nueva experiencia digital afecta nuestra vida social y política de múltiples maneras.

Por un lado, las personas esperan respuestas y soluciones de igual sencillez y velocidad que las que reciben de sus redes sociales: mensajes simples, en cosa de segundos. Esta es una expectativa casi imposible de cumplir para la política democrática, que considera el diálogo y la construcción de consensos parte esencial del proceso de toma de decisiones. Frente a ello, la ultraderecha ofrece respuestas simples e inmediatas. Esto no quita que haya muchísimo que mejorar de la actual capacidad de respuesta del Estado y la política, y nos desafía a pensar una institucionalidad y proceso de toma de decisiones mucho más arraigado y abierto a la ciudadanía.

Este problema se agudiza al internalizar nosotros, como organización política, esta misma cultura de la aceleración e inmediatez, asumiendo una lógica de la urgencia: la necesidad de reaccionar sin respiro a los estímulos del día a día, aquello de lo que se habla en la mañana, no es lo mismo que en la tarde, impidiendo la planificación a largo plazo y poniendo aún más trabas a los sectores políticos con menores vínculos con los medios para poder influir sustantivamente en la agenda. Priorizamos el impacto mediático o la viralización por sobre la organización y construcción colectiva.

Por otro lado, como señalamos arriba, un puñado de empresas globales organizan e intermedian nuestras relaciones, trabajo y consumo, ocupando una porción cada vez más importante de nuestro tiempo. Si bien algunas nos facilitan muchos aspectos de nuestra vida, poco a poco nos vamos dando cuenta cuán dependientes somos de sistemas que no controlamos y cuán inmersos estamos en ecosistemas totalmente ajenos a cualquier tipo de control democrático, que moldean día a día nuestros deseos, intereses y preferencias para orientarlos al consumo y la polarización.

Estos cambios ocurren en una sociedad que ya venía cambiando mucho. La investigación social nos muestra que las personas hoy construyen sus trayectorias de vida de forma mucho más autónoma, sin el respaldo de instituciones estables que antes ofrecían algún tipo de seguridad (sindicatos, partidos, un Estado de bienestar sólido o incluso la religión). Este escenario se ha agudizado por los empleos a través de plataformas (como Uber), que ofrecen vías de “emprendimiento” y autoexplotación nunca antes vistas. Estas nuevas formas de ganarse la vida generan en las personas una experiencia al mismo tiempo de libertad. Este también es un enorme desafío para nosotros como izquierda, acostumbrados a ofrecer soluciones de empleo formal y seguridad social, al encontrarnos sin muchas respuestas ante estos nuevos desafíos, a la vez que se expande una cultura que fija en el individuo todas las condicionantes de su éxito o fracaso, despolitizando así las fallas del sistema y convirtiendo los riesgos inherentes a la vida, en algo individual e intransferible. Este creciente fenómeno fragmenta la experiencia social y dificulta la organización social en torno a aspectos estructurales de la precariedad.

4. Organizarse, superar el pesimismo y recuperar las utopías

Es común sentir hoy una suerte de "impotencia reflexiva" frente a un sistema que, a pesar de sus innumerables fallas e injusticias, parece ser irremplazable. Se nos repite en la cabeza el “fin de la historia” de Fukuyama o el “no hay alternativa” de Margaret Thatcher, porque pareciera no haber espacio para pensar fuera del marco del capitalismo, y esbozar un horizonte transformador se reduce peyorativamente a la categoría de “utopía”. Idealistas que sueñan con lugares que no existen.

Sin embargo, la historia nos enseña que muchos de los órdenes que hoy nos parecen naturales e inamovibles fueron, en su momento, desafíos

que se creían imposibles. La abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, el fin del Apartheid o los propios procesos de independencias latinoamericanas de la monarquía española fueron procesos que enfrentaron inercias similares a las actuales. En todos esos casos, la organización colectiva logró vencer la desesperanza, aprovechar las oportunidades y transformar la realidad. La crisis actual no tiene un destino inevitable, sino que se desarrolla en un campo de disputa. Y tenemos el privilegio de estar en una época en la que la mayoría de los malestares que aquejan a la humanidad tienen una solución técnicamente posible, pero no la voluntad política para superar los intereses que obstaculizan su realización.

El desafío para el Frente Amplio en este contexto global es responder a preguntas que orienten nuestra acción política:

1. Sobre nuestra capacidad de organización
 - ¿Cómo construir una organización política sostenible y con arraigo en tiempos de aceleración, donde la "política viral" de corto plazo suele imponerse por sobre la planificación estratégica?
 - ¿De qué maneras concretas podemos articular demandas locales dispersas en un escenario de profunda fragmentación social y desconfianza en las instituciones?
2. Sobre la disputa cultural y narrativa
 - ¿Cómo disputar el sentido común y la verdad frente a una maquinaria digital diseñada para la desinformación, el odio y la polarización?
 - ¿Cómo pasar de una lógica meramente defensiva o de resistencia, a una ofensiva que logre instalar un proyecto de futuro deseable?
3. Sobre nuestra vocación de mayoría y anclaje material

- ¿Qué agenda y qué prácticas concretas ofrecen soluciones reales a las preocupaciones cotidianas de las familias trabajadoras, más allá de las consignas abstractas?
- ¿Cómo construir alianzas internacionales, particularmente en Latinoamérica y con el resto del Sur Global, para ofrecer seguridad y bienestar frente a la incertidumbre a la que estamos sometidos con esta policrisis?
- ¿Cómo abordar la crisis que experimenta el orden internacional global, sin quedarnos defendiendo acríticamente instituciones que sabemos tienen grandes limitaciones, pero a la vez no sumar agua al molino de la ultraderecha que busca destruir lo poco que existe?

La necesidad de una articulación progresista a nivel internacional es una urgencia de sobrevivencia democrática frente a quienes, con muchos más recursos, se coordinan y lideran la reacción autoritaria.

En este escenario, la ideología no nos sirve como un punto de llegada donde todo está resuelto, sino como la brújula necesaria para navegar la incertidumbre y construir, colectivamente, una alternativa soberana para Chile.

★ Segunda sección: Balance Nacional (2019-2025)

1. Introducción y síntesis del balance del período

Esta sección presenta un balance de los últimos dos años de la administración del Presidente Piñera y de los cuatro años de la administración del Presidente Boric. En ella se analiza la situación de crisis política y social en el cuál

culmina la administración previa y que no solo ayudan a explicar el triunfo del Presidente Boric en las elecciones, sino que definen las frágiles condiciones económicas y sociales en las que asume el gobierno entrante. Considerando dichas condiciones adversas, se destacan los logros más relevantes del Gobierno del Presidente Boric, analizando su impacto social, económico y político en el corto y mediano plazo de nuestro país. Sin embargo, también se revisan los fallidos procesos constituyentes, las expectativas de transformación pendientes de cumplimiento y las debilidades detrás de dichas insuficiencias, que en la práctica resultan en la derrota electoral del 2025.

En síntesis, la administración del Presidente Boric logró importantes transformaciones sociales y económicas que heredarán un mejor país a las siguientes generaciones. Sin embargo, no se logró consolidar la fuerza del primer Apruebo y de la elección presidencial en una mayoría social robusta, capaz de proyectar un ciclo de cambios de largo aliento. Este período evidencia que las transformaciones profundas no dependen únicamente de la voluntad política o de triunfos electorales puntuales, sino de la capacidad para construir un respaldo social y político duradero, que dé estabilidad al proyecto en el tiempo.

2. Los últimos años de la administración anterior

El período 2020–2021 del segundo gobierno del Presidente Piñera estuvo marcado por una crisis política y social de gran profundidad. El estallido social, iniciado a fines de 2019 y extendido hasta comienzos de 2020, expresó un malestar acumulado por años en amplios sectores de la ciudadanía hacia el conjunto de los partidos políticos y de la institucionalidad vigente. El gobierno apostó a reprimir el conflicto, mostrando limitadas capacidades de diálogo político y de articulación con actores sociales, lo que dificultó encauzar institucionalmente las demandas que se expresaban con contundencia en manifestaciones masivas como la del 25 de octubre y la Huelga General del 12 de noviembre. La salida política institucional a lo anterior fue el Acuerdo del 15 de noviembre y la apertura de un proceso constituyente que contó con un respaldo social histórico.

Pocos meses después, el país enfrentó la pandemia del COVID-19, uno de los momentos más complejos en décadas, que requería una decidida gestión sanitaria y un conjunto de medidas económicas en apoyo a las familias y la economía. Si bien la gestión de las vacunas universales y gratuitas fue exitosa, la falta de respuesta del gobierno ante las urgencias económicas de la ciudadanía, derivó en la solución de los retiros de los fondos pensiones, lo que terminó contribuyendo en aumentar la inflación. Chile registró una trayectoria anómala en 2021: fue el único país OCDE que aumentó sustancialmente su gasto cuando el promedio internacional ya iniciaba su reducción. Esta fundamental diferencia respecto a las economías comparables deterioró aún más el balance fiscal del Estado, justo antes del cambio de mando.

A ello se sumaron desafíos estructurales que se agudizaron en ese período, producto en parte por la propia gestión del gobierno de Piñera: los mayores flujos migratorios registrados hasta entonces, que alcanzaron su máximo histórico tras la visita de Piñera a Cúcuta; el recrudecimiento del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, azuzado por un abordaje centrado en la militarización del territorio por parte del gobierno; y un cambio en los patrones criminales, con un aumento general de la delincuencia y la violencia urbana. El cierre del gobierno, que concluyó con la aprobación más baja desde el retorno a la democracia, dejó un sistema político fragmentado, con baja confianza en las instituciones y una ciudadanía profundamente frustrada, que demandaba cambios pero también estabilidad y certezas materiales.

El resultado fue una elección presidencial donde en primera vuelta 9 de cada 10 electores votaron por candidatos que se declaraban en oposición al gobierno del Presidente Piñera, triunfando José Antonio Kast del Partido Republicano; y en diciembre se impone en segunda vuelta el diputado Gabriel Boric, abanderado de Apruebo Dignidad, con el apoyo de las candidaturas presidenciales de primera vuelta de Yasna

Provoste y Marco Enriquez Ominami, así como los partidos de la ex Concertación.

3. Las condiciones políticas, sociales y económicas en que asume el Gobierno del Presidente Boric

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric asume en marzo de 2022 en condiciones especialmente adversas, tanto en el plano político como social y económico, en el contexto de una ciudadanía que miraba con una mezcla de esperanza, desconfianza y escepticismo la posibilidad de mejoras concretas a través de las reformas del gobierno y la Convención Constitucional.

En el plano político, pese a obtener la mayor votación registrada hasta entonces en una segunda vuelta presidencial, inició su mandato con minoría en ambas cámaras y sin una coalición de gobierno plenamente consolidada. El Frente Amplio aún no se encontraba unificado como partido, y el incipiente oficialismo se encontraba en un proceso de reconfiguración interna. Además, la Convención Constitucional estaba compuesta mayoritariamente por independientes sin experiencia previa en espacios de decisiones políticas e institucionales. A ello se sumaba que muchas dirigencias políticas asumían por primera vez roles de conducción administrativa del Estado, mientras que la necesidad de construir gobernabilidad en un Congreso fragmentado y bajo nuevas reglas electorales, se daba en medio de un clima político de alta desconfianza.

En el plano social, el país aún enfrentaba los efectos residuales de la pandemia, con profundas secuelas. Paralelamente, comenzaba a instalarse con fuerza una crisis de seguridad, marcada por el avance del crimen organizado, mayor violencia armada y creciente percepción de inseguridad en barrios populares. Las urgencias ciudadanas eran inmediatas y concretas: seguridad, migración, empleo, control del costo de la vida y estabilidad.

En el plano económico, la administración asumió en un escenario de extrema complejidad: una inflación elevada que obligó al Banco Central a implementar una política monetaria restrictiva, enfriando la actividad para lograr la estabilidad de precios. A esto se sumó un déficit fiscal de casi el 11% del PIB y políticas públicas desfinanciadas en su origen, como la PGU. Esta fragilidad se vio agravada por el deterioro de los ahorros soberanos, tras retiros del FEES que superaron el 60% de todos los aportes históricos realizados hasta la fecha. Finalmente, el mercado laboral presentaba un desajuste crítico: mientras la población en edad de trabajar aumentó en un millón de personas, impulsada por flujos migratorios, la creación de empleo en el periodo anterior fue prácticamente nula, configurando un cuadro de fuerte estrechez fiscal y presión macroeconómica.

En síntesis, el gobierno asumió con debilidad parlamentaria, en medio de una economía tensionada y una sociedad marcada por urgencias materiales muy concretas. El proyecto del Frente Amplio orientado a transformaciones sociales para expandir derechos y redistribuir la riqueza, se enfrentaba con nuevas urgencias relacionadas con estabilizar el país y recuperar certezas básicas para la vida cotidiana.

4. Los procesos constituyentes

La canalización institucional del Estallido Social abrió en nuestro país un momento constituyente inédito, que se expresó en dos procesos de discusión constitucional distintos entre los años 2020 y 2023. El primero, marcado principalmente por el aventón social del Estallido, con presencia mayoritaria de representantes independientes y militantes de izquierda o progresistas. El segundo, generado institucionalmente debido al fracaso del primer proceso, incorporó en su diseño una Comisión de Expertos que elaboró un borrador de consenso y, posteriormente, fue ajustado por un Consejo Constitucional con mayoría de derecha, particularmente del Partido Republicano. Ambos procesos constituyentes fracasaron en su objetivo de dotar al país de una nueva

constitución y deben ser analizados en sí mismos.

El primer proceso constituyente estuvo marcado por la regla de los dos tercios y por una alta presencia de independientes junto a las fuerzas políticas orgánicas. La regla de aprobación de normas por un mínimo de dos tercios de los representantes, pensada originalmente para obligar a amplios acuerdos con la derecha, operó en la práctica de forma distinta: al no alcanzar la derecha ese tercio de bloqueo, la negociación se desplazó exclusivamente hacia el campo progresista e independiente construyendo mayorías fragmentadas y logrando concesiones múltiples en imperfectas para lograr superar el quórum. Sumado a lo anterior, la preeminencia de independientes y la **insuficiente conducción política** impidieron articular una mayoría orientada a una Constitución habilitante para un Estado social y democrático de derecho. Por esto, en lugar de priorizar un texto capaz de consolidar una mayoría social duradera, se incorporaron maximalismos y disposiciones que, aun conteniendo avances importantes, generaron incertidumbre en sectores de la ciudadanía y facilitaron ataques por parte de sus adversarios.

Hubo, además, **errores políticos** que corresponde asumir. Faltó cuidado en la conducción simbólica del proceso. Se subestimó que la legitimidad no solo se construye desde la razón normativa, sino también desde la confianza y la percepción de responsabilidad. Se mezclaron demandas materiales ampliamente compartidas, como pensiones, salud y derechos sociales, con propuestas percibidas como alejadas de las urgencias cotidianas. Se creyó que las mayorías relativas obtenidas en 2020 y 2021 eran estables e inalterables, no se advirtió el cambio de prioridades sociales que estaba ocurriendo pospandemia, ni se dimensionó el impacto de la ampliación al votante obligado. Ante un diseño institucional del proceso que hacía cada vez más difícil lograr un acuerdo transversal, faltó mayor diálogo político, incluso con sectores democráticos de la derecha.

El proceso se ensimismó, distanciándose del país que enfrentaba urgencias sociales y económicas críticas: alta inflación, crisis de seguridad, estancamiento del empleo y estrechez fiscal. En un contexto de altísima exposición mediática, hubo innumerables errores comunicacionales que alejaron a la ciudadanía del proceso. Gobierno y partidos concentraron buena parte de su energía en el debate constitucional, cuando la situación heredada también demandaba foco en respuestas materiales inmediatas. Todo esto se unió a un diseño institucional donde el plebiscito de apertura del proceso y la elección de los convencionales se realizó con voto voluntario, y la ratificación del texto con voto obligatorio: casi la mitad del electorado solo ingresó al final del proceso. En ese marco, el plebiscito de salida y el triunfo del Rechazo constituyeron un punto de inflexión. No solo significaron el rechazo de una propuesta constitucional, sino la derrota de un ciclo ascendente de movilización social desde comienzos del siglo XXI, con la consecuente fractura en la expectativa transformadora que dominaba el debate político, obligando al gobierno recién asumido a modificar su mandato.

El principal aprendizaje para el Frente Amplio y nuestra generación política es claro: las transformaciones requieren máximo cuidado en la construcción y sostenimiento de mayorías políticas y sociales duraderas. No basta con tener propuestas programáticas ni mayorías circunstanciales; es indispensable consolidar avances de acuerdo con las condiciones políticas de cada momento y asegurar que los cambios cuenten con legitimidad amplia y estabilidad en el tiempo.

El segundo proceso constituyente, a través de un Consejo Constitucional, fue conducido por el Partido Republicano, que contó con una mayoría clara en el órgano redactor y con instancias institucionales de equilibrio, como la Comisión de Expertos. Sin embargo, pese a tener mayores condiciones formales de conducción que la Convención anterior, se repitió un error similar: se priorizó la afirmación de un ideario propio por

sobre la construcción de un acuerdo político y social amplio. La mayoría circunstancial dentro del Consejo no se tradujo en una mayoría en el país.

El triunfo del *En Contra*, también con voto obligatorio, confirmó que la ciudadanía no comparte el ideario más extremo de la derecha y que los avances en materia de igualdad y derechos de las mujeres son activos políticos que la sociedad valora y no está dispuesta a retroceder. A pesar de que hay incertidumbre sobre cómo continuará el debate constitucional, sí es claro que el proceso no logró cerrarlo definitivamente con un texto refrendado por la ciudadanía, ni consolidó una mayoría en torno a las ideas impulsadas por el Partido Republicano.

5. Las expectativas y logros del Gobierno del Presidente Boric

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric comenzó su gestión en un momento político sujeto a enormes expectativas. Representaba no sólo un cambio de rumbo respecto a la administración anterior, que cerró con crisis social, debilitamiento institucional y una situación fiscal y económica desestabilizada, sino también la esperanza de avanzar en transformaciones estructurales largamente postergadas, especialmente en pensiones, salud y derechos sociales. En un contexto de hastío con la política tradicional, su liderazgo generacional y su estilo dialogante proyectaban la posibilidad de renovar la forma de ejercer el poder y reconstruir confianzas.

La primera tarea del gobierno fue volver a estabilizar al país post estallido y pandemia. En ese plano, los resultados fueron significativos: se logró controlar la inflación a través de una política monetaria restrictiva del Banco Central y una reducción del gasto fiscal por parte del ejecutivo, generando condiciones particularmente desafiantes para el crecimiento económico. A pesar de eso, se crearon más de 700 mil empleos, acumularon 34 meses consecutivos de crecimiento real de las remuneraciones y se sostuvo crecimiento

económico por sobre las expectativas del mercado en todos los años del gobierno. En seguridad, se aumentó de manera histórica la inversión pública, que estuvo estancada en la administración anterior, logrando quebrar la curva de homicidios y robos violentos, que actualmente se encuentran disminuyendo. La tasa de homicidios bajó 20% en los cuatro años de gobierno. Los hechos de violencia rural en el sur de Chile bajaron de 1.680 en 2021 a 350 en 2025. Nuestras fronteras se controlaron, reduciendo a la mitad los ingresos por pasos fronterizos no habilitados, y en nuestras escuelas se recuperó la asistencia y rendimiento escolar.

Más allá de la estabilización, el gobierno impulsó reformas estructurales que marcarán el mediano y largo plazo. Considerando la condición de minoría política en el Congreso y la frágil situación política y económica, el Gobierno apostó por un amplio diálogo social y político para lograr dichos avances. En el centro estuvieron las y los trabajadores: la ley de 40 horas y el mayor aumento real del salario mínimo en décadas son avances concretos en calidad de vida. Tras casi veinte años sin cambios de fondo, se aprobó una reforma de pensiones que mejora las jubilaciones en el corto plazo mediante el aumento de la PGU y, por primera vez desde la reforma previsional de la dictadura, se crea un seguro social. Aunque no se logró eliminar las AFP ni transformar completamente el modelo, se incorporaron elementos que aumentan la competencia y abren espacio a reformas futuras.

En protección social, se creó el Sistema Nacional de Cuidados, se implementó el Copago Cero y se aprobó la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. En desarrollo productivo se impulsó la Estrategia Nacional del Litio con protagonismo de las empresas públicas CODELCO y ENAMI, el Plan de Acción de Hidrógeno Verde y el Acuerdo de Industrialización del Biobío. Estas iniciativas reflejan una apuesta por un modelo de desarrollo donde el Estado asume un rol estratégico, articulando empresa pública e inversión privada

para generar valor y nuevos ingresos para el país. Se aprobó el Royalty Minero, aumentando la recaudación de la gran minería, y la Ley de Fraccionamiento Pesquero, fortaleciendo a la pesca artesanal.

Asimismo, se ingresaron proyectos que, aunque no se aprobaron íntegramente, marcarán el debate futuro: el fin del CAE y creación del FES, Sala Cuna para Chile, la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE) y la Negociación Colectiva Multinivel. Estas iniciativas configuran una agenda programática que seguirá siendo referencia para la izquierda y el progresismo.

Más allá de los logros concretos en política pública, que son materialmente decisivos para la vida de millones de personas, el Gobierno del Presidente Boric logró algo que al inicio de la administración parecía improbable: articular una coalición progresista amplia, capaz de gobernar en un contexto de fragmentación política y alta polarización. Esa coalición aún enfrenta desafíos de consolidación y cohesión, pero constituye un punto de partida relevante para un progresismo amplio, competitivo y transformador. Entre sus desafíos está construir una cultura política compartida que priorice hablarle a la sociedad por sobre la pelea interna entre partidos, y que reconozca el valor de las distintas identidades y proyectos políticos, en un marco democrático común. Por último, el gobierno permitió proyectar liderazgos que son y serán determinantes para el futuro de la coalición: Jeanette Jara, nuestra abanderada presidencial, Carolina Tohá, precandidata en las primarias de la coalición, y diversas ministras y ministros del Frente Amplio que asumieron responsabilidades complejas en un momento especialmente exigente.

Sin embargo, estos logros conviven con expectativas que no pudieron ser plenamente satisfechas. Parte del desafío pendiente será analizar con honestidad las limitaciones políticas, estratégicas y comunicacionales que impidieron avanzar más, sin desconocer que el gobierno operó en condiciones particularmente adversas.

6. Las debilidades del período y los desafíos pendientes

Si bien, las condiciones adversas limitaron lo que era posible hacer, también existieron debilidades propias, de articulación, conducción y despliegue político, que restringieron la profundidad de los cambios. Reconocerlas no implica desconocer los logros, sino asumir que, en momentos de transformación, la estrategia y su implementación es tan importante como el programa.

Primero, la estrategia de despliegue de reformas y comunicacional.

Se debió priorizar el primer año las reformas más sentidas por la ciudadanía, como salud, pensiones y CAE, aún en el marco de la incertidumbre institucional que implicaba el proceso constituyente y la decisión de priorizar la reforma tributaria. Se debió aprovechar con mayor decisión la fuerza política de los primeros meses para avanzar iniciativas que habilitarán transformaciones posteriores, antes del reflujo político del plebiscito.

A ello se sumó una estrategia comunicacional y política insuficiente. Si bien el diálogo con la oposición era imprescindible dada la minoría parlamentaria, en distintos momentos la comunicación fue excesivamente defensiva, lo que debilitó la construcción de respaldo social a nuestras iniciativas y redujo la capacidad de distinguir dentro de la oposición a aquellos disponibles para avanzar en acuerdos respecto a quienes se negaban a cualquier cambio.

Por último, casos como Fundaciones, Monsalve o Allende fueron utilizados con evidente intencionalidad política por la oposición. Sin embargo, también revelaron falencias en mecanismos de prevención, control y manejo de crisis. A la vez faltó firmeza para defender posiciones que eran correctas más allá del asedio mediático y político. Una coalición progresista que aspira a gobernar nuevamente debe fortalecer salvaguardas institucionales y mecanismos de reacción rápida que eviten

errores, reduzcan el daño político y preserven la credibilidad.

Segundo, la disputa cultural e institucional.

Se observa aún un predominio de visiones conservadoras en espacios gravitantes del debate público y la institucionalidad, como ciertos medios de comunicación, órganos autónomos y el Poder Judicial, donde además han emergido cuestionamientos a la probidad. Ello no explica por sí solo las dificultades, pero sí configura un terreno adverso donde las reformas enfrentan prejuicios estructurales y marcos interpretativos desfavorables.

En este mismo plano, quedó en evidencia la necesidad de fortalecer nuestro vínculo con sectores sociales que experimentan frustraciones con el Estado o que no se sienten representados por la política tradicional. Construir mayorías duraderas exige politizar las demandas sociales cotidianas de seguridad, transporte, empleo y servicios públicos desde una perspectiva transformadora, sin dejar ese espacio al anti establishment o a soluciones simplistas.

Tercero, debilidades en el diseño e impulso de políticas estructurales.

La principal derrota de política pública fue el rechazo a la reforma tributaria. En un país con alta concentración de la riqueza y un Estado comparativamente pequeño respecto de los estándares de bienestar que aspiramos a alcanzar, su aprobación era clave tanto para reducir desigualdades como para consolidar sostenibilidad fiscal en el fortalecimiento del Estado. Más allá de la responsabilidad evidente de la derecha en su rechazo, la derrota expresa un problema de diseño: hubo una estrategia centrada en la negociación en el Congreso, sin abrir la disputa a la sociedad. Además, la posterior ausencia de una reforma tributaria robusta en el programa presidencial de 2025 expresa una derrota cultural más profunda que se debe revertir. Una reforma tributaria progresiva y con alta capacidad de recaudación

debe volver al centro del proyecto de la coalición.

Otra oportunidad perdida fue la Reforma de Salud. Si bien se aprobó copago cero y se fortaleció Fonasa, la crisis estructural del sistema de Isapres abría una ventana para impulsar una reforma integral que avanzara hacia mayor solidaridad y racionalidad en el sistema. Sin embargo, no se logró presentar ni consolidar una propuesta estructural que ordenara el debate, y se expresaron diferencias dentro de la coalición sobre la relación entre la salud privada y la pública. Más allá de avances importantes en gestión y reducción de listas de espera, la transformación del sistema de salud sigue siendo una deuda importante.

Cuarto, seguridad y migración.

Aunque el Gobierno terminó implementando una agenda robusta en seguridad, con la mayor cantidad de leyes en la materia aprobadas desde la recuperación de la democracia y un aumento de inversión pública histórica (que contrasta con el estancamiento presupuestario de la administración anterior), su consolidación fue tardía y siempre se entendió como algo alejado del ideario del gobierno, sin que lográsemos ser una alternativa creíble en la materia. Esto permitió a la oposición dominar la discusión pública. Algo similar ocurrió con la crisis migratoria, donde se redujo a la mitad los ingresos irregulares, pero la respuesta demoró en tomar forma política clara. Esto afectó la credibilidad y percepción de la iniciativa gubernamental.

Asimismo, debates como la Ley Naín-Retamal evidenciaron tensiones internas que refuerzan la necesidad de contar con una propuesta coherente en seguridad, orden público y migración. No podemos permitir que sean nuestros adversarios quienes definan el terreno legislativo en la materia.

Quinto, definiciones fiscales estáticas.

Tras el rechazo de la reforma tributaria, el Gobierno debió relajar la trayectoria fiscal. No hacerlo impidió avanzar en lineamientos sociales

importantes del programa y permitió que la oposición eludiera su responsabilidad por haber recortado los recursos que las urgencias sociales y la estabilidad fiscal que el país necesitaba.

Si bien se logró estabilizar la deuda pública tras años de deterioro, las metas fijadas dificultaron el despliegue de políticas públicas urgentes en un contexto de altas necesidades productivas y sociales. El desafío hacia adelante es compatibilizar responsabilidad fiscal con mayor desarrollo productivo y capacidad transformadora, diseñando marcos con perspectiva intertemporal que permita avanzar en agendas que sean vistas como un activo estratégico para la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Sexto, partido y proyecto político.

El proceso de unificación del Frente Amplio fue un acierto que fortaleció nuestra herramienta política. Hoy contamos con un partido cohesionado y con mayor capacidad de articulación. Sin embargo, el foco excesivo en el devenir gubernamental debilitó el trabajo social y territorial autónomo, así como la elaboración estratégica de un proyecto país más integral.

Junto con ello, el proyecto histórico del Frente Amplio es algo todavía pendiente de construir. Si bien tenemos principios y orientaciones claras, persisten desafíos relevantes: como profundizar propuestas en desarrollo productivo, política fiscal, inserción internacional, seguridad y migración; comprender la totalidad de los órganos del Estado que inciden en el desarrollo político; elaborar nuestra mirada sobre la modernización del Estado; incorporar con mayor precisión las realidades diferenciadas de las regiones; y elaborar un horizonte estratégico que articule las distintas luchas en un proyecto de país reconocible, mayoritario y sostenible en el tiempo.

7. Balance de las elecciones 2025

El resultado electoral debe analizarse con realismo y sin simplificaciones. El voto obligatorio consolidó la irrupción de un nuevo electorado masivo, menos ideologizado, más distante de la política tradicional y con prioridades centradas en la vida cotidiana: seguridad, migración, empleo, ingresos y servicios públicos. La experiencia reciente demuestra que las mayorías que se articulan para rechazar algo no necesariamente se transforman en mayorías afirmativas capaces de sostener un proyecto político coherente y estable en el tiempo.

En ese contexto, la votación de Parisi expresa un doble rechazo. Por un lado, interpela al neoliberalismo en su dimensión más concreta: deuda, llegar a fin de mes y abusos cotidianos. Por otro, cuestiona a la derecha e izquierda, percibida por parte de ese electorado como distante de sus urgencias materiales o como continuadora de lógicas institucionales que no resolvieron sus problemas. No se trata de un voto ideológicamente consistente, sino de un voto de malestar que revela una disputa abierta por la representación de quienes viven inseguridad económica y desconfianza hacia las instituciones.

Un elemento adicional es el alto voto nulo y blanco, particularmente concentrado en jóvenes precarizados y en territorios intermedios o rurales con debilidad institucional. Son sectores que concurren a votar, pero no encuentran una oferta política que los convoque. Comprender esa distancia y construir puentes con esos grupos será determinante para cualquier estrategia futura.

La elección fue una derrota para el progresismo. Sin embargo, el 58% que obtuvo Kast no constituye un bloque ideológico homogéneo ni una mayoría consolidada de derecha en términos programáticos, tal como demuestra la derrota del Partido Republicano en el plebiscito de salida del segundo proceso constituyente. Es

una agregación amplia de votos motivados por razones diversas: orden, castigo, incertidumbre de seguridad o rechazo al gobierno. No necesariamente implican adhesión estructural a un ideario regresivo.

El desafío estratégico es reconstruir una mayoría democrática amplia frente a soluciones regresivas, articulando respuestas concretas a las urgencias materiales sin renunciar a un horizonte de transformación.

★ Tercera sección: Estrategia partidaria para el período 2026-2029

1. Caracterización del momento: Nuevo Gobierno y Configuración Política Institucional

La nueva administración ha iniciado su gestión bajo una estrategia de "gobierno de emergencia". Este relato busca instalar la idea de que han recibido el país en condiciones críticas e imprevistas, inventando la premisa de una "crisis fiscal" para justificar una agenda de retrocesos en reformas sociales ya consolidadas. Esta fórmula, observada en otras experiencias internacionales de la nueva derecha, no es solo una descripción administrativa, sino una herramienta de disputa simbólica destinada a legitimar el proyecto extremo que pretenden implementar.

El despliegue del Ejecutivo se concentra en dos ejes que responden a urgencias ciudadanas reales, pero con un enfoque que incorpora elementos regresivos. Primero, en una agenda que combina seguridad y migración, han priorizado una agenda de alto impacto comunicacional vinculada al control fronterizo, ejemplificada en medidas como la construcción de zanjas en la zona norte, y una agenda

legislativa que incorpora iniciativas diversas, incluyendo el proyecto de ley de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, que permitiría que salgan de la cárcel criminales condenados por delitos de violación o de lesa humanidad.

Segundo, se intenta instalar una falsa narrativa de insolvencia fiscal para desmantelar derechos sociales. Los datos contradicen esta tesis: la administración del Presidente Boric fue la que menos aumentó la deuda pública desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y el país mantiene un nivel de deuda 30 puntos del PIB por debajo del promedio de economías emergentes. En definitiva, el relato de "emergencia" opera entonces como justificación para el proyecto histórico de la derecha, reducción del Estado con menor carga impositiva para los ricos y desprotección social para las grandes mayorías, implementado a través de la focalización del gasto público para validar desde una supuesta eficiencia fiscal un rol subsidiario del Estado.

Con el propósito de alcanzar dicha agenda, el Ejecutivo ha anunciado el ingreso de un proyecto de ley misceláneo denominado "Proyecto de Reconstrucción Nacional". Si bien el nombre apela a la unidad y el fortalecimiento institucional, los contenidos que han trascendido apuntan hacia una agenda de desregulación y retroceso en seguridad social.

Para nuestro proyecto político, el desafío consiste en reconocer que la victoria de la actual administración se explica, en gran medida, por urgencias ciudadanas no resueltas. No obstante, la solución a estos dolores, como lo son la seguridad, empleo y costo de la vida, no reside en la eliminación de derechos, sino en un proyecto que promueva la igualdad sustantiva y el fortalecimiento institucional. Nuestro rol debe ser conectar con estas urgencias ofreciendo respuestas concretas que protejan lo avanzado y conduzcan al país hacia mayores grados de progreso. Asumimos la defensa de la obra del Presidente Boric como un imperativo para proteger los derechos conquistados y desmantelar el relato de crisis del oficialismo,

entendiendo que esta es la base necesaria para desplegar nuestra tarea principal: la construcción de un proyecto de futuro que profundice las transformaciones que Chile aún requiere.

En el plano institucional, hay algunos elementos necesarios a considerar para una estrategia frenteamplista. Primero, el actual oficialismo ha logrado configurar un bloque amplio. Sin embargo, ha mostrado grietas en los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad y en el retroceso de derechos sociales conquistados, lo que denota que no hay una posición monolítica detrás de las iniciativas que ha impulsado el ejecutivo. Además, hay sectores en la derecha que no se han sumado al gobierno y que muestran que no todas las fuerzas depositan las mismas esperanzas en la capacidad del actual ejecutivo en impulsar su agenda y mantener satisfecho a los distintos sectores del oficialismo.

Frente a esto, la oposición no puede permitirse disputas internas de hegemonía que fragmenten nuestra capacidad de incidencia ni perder de vista la importancia de actuar unidos ante los elementos centrales del proyecto regresivo del gobierno. Más allá de las legítimas diferencias y la relevancia de que la ciudadanía entienda claramente dónde se sitúan las fuerzas de la oposición, no se pueden perder de vista estos objetivos prioritarios.

2. Objetivo general del período

Ante el agotamiento del ciclo neoliberal y el auge de la ultraderecha, el objetivo general es construir una mayoría social y política tras una agenda de transformaciones que ofrezca una salida democrática a los desafíos que enfrenta el país y que detenga la restauración conservadora. Dicha agenda debe buscar avanzar hacia una mayor igualdad política, económica y social, sustentada en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible que garantice bienestar material concreto para la ciudadanía.

¿A qué nos referimos con la mayoría social y política?

Nuestro horizonte de transformaciones requiere la construcción de una base mayoritaria y estable para su realización. Esta mayoría que se precisa supera acuerdos parlamentarios circunstanciales o triunfos electorales puntuales, toda vez que es a través de una base social organizada que respalde los cambios cómo se construyen reformas estructurales de largo plazo. Los partidos políticos son actores imprescindibles, pero las transformaciones las hace la sociedad en su conjunto. Por eso, apuntamos a algo más profundo y durable: una mayoría político-social capaz de abrir un nuevo ciclo de transformaciones, evitando la lógica pendular de avances y retrocesos.

En el contexto de voto obligatorio, debemos internalizar que la movilización de los sectores convencidos no es sinónimo de una mayoría sustantiva. Requerimos estrategias que dialoguen con públicos diversos, incluidos los no movilizados o con poco interés en la política, sin caer en lecturas moralizantes. El desafío es que estos sectores asuman como propio un nuevo modelo de desarrollo y no solo se aglutinen en oposición a lo actual. Necesitamos construir una mayoría "en positivo", cimentada en mínimos comunes que aborden las urgencias más sentidas, pero con liderazgos que amplíen constantemente las fronteras de lo posible hacia tesis más progresistas.

Esta mayoría se construye desde la acción, resolviendo problemas materiales y cotidianos, como lo hemos hecho históricamente desde las luchas feministas, estudiantiles y medioambientales. La articulación política concreta en la acción precede y fortalece los acuerdos formales. Esto implica reinterpretar las injusticias actuales del modelo para construir soluciones situadas en la realidad del Chile de hoy.

¿Qué significa evitar una restauración conservadora?

Las restauraciones conservadoras son periodos en los que el ascenso de sectores de derecha y de la élite genera retrocesos en derechos sociales y libertades, retomando una orientación

del Estado que sirve a los grandes intereses económicos por sobre las mayorías.

Presenciamos un fenómeno global de ascenso de sectores regresivos que coordinan sus relatos para debilitar el rol social del Estado. Afirmamos que hoy no existe una mayoría social de derecha consolidada en Chile, pero sí existe el riesgo de que la actual administración logre asentar una hegemonía conservadora con altos costos sociales. Nuestro desafío es construir una oposición efectiva que dispute la mayoría del país, lo que implica necesariamente no hablar solo a nuestro electorado previo, sino también a aquellas personas que votaron por la propuesta oficialista con el anhelo de encontrar soluciones concretas a diversas urgencias sociales a las cuales nuestro proyecto debe responder.

¿Qué implica un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible que garantice bienestar material concreto para la ciudadanía?

Nuestro horizonte de desarrollo parte de una premisa clara: Chile y su gente no quieren retroceder en las conquistas alcanzadas. La única razón por la cual la actual administración se siente habilitada para proponer el desmantelamiento de derechos es su capacidad de convertir los problemas complejos que atraviesa el país en una narrativa de emergencia nacional que supuestamente exigiría reducir derechos. Por ello, nuestra primera tarea es defender los derechos sociales de las personas, desmontando los aspectos artificiales de la crisis, como las falsas soluciones que se proponen, pero sin perder de vista que la ciudadanía sí percibe urgencias inmediatas.

Un nuevo modelo de desarrollo debe reconocer que no basta con redistribuir; debemos liderar una agenda de crecimiento que sea sostenible en el tiempo e inclusiva en sus resultados, distribuyendo las ganancias de la productividad entre todos los sectores sociales. En este diseño, el Estado también debe asumir como función objetivo la reducción directa del costo de la vida. Esto implica políticas activas para disminuir el peso de gastos esenciales, como el

arriendo, las tarifas eléctricas, la salud y el transporte, en el presupuesto familiar. De esta manera, el modelo de desarrollo deja de ser una cifra abstracta para convertirse en bienestar material concreto, asegurando que el progreso se traduzca en una vida segura, digna y libre para todas las personas en Chile.

3. Objetivos específicos del período

Del objetivo general que proponemos se desprenden un conjunto de objetivos específicos que orientarán nuestra acción en los próximos años y que ponemos a disposición del Congreso para su deliberación. Estos se organizan en cuatro dimensiones complementarias: la política, que aborda aquellas materias de la política institucional, la ideológica, que aborda aquellas vinculadas a las ideas y lineamientos de largo plazo del partido, la social, que aborda cómo el partido debe insertarse en el tejido y entramado social, y la partidaria, que aborda los desafíos orgánicos e internos del Frente Amplio. A continuación un índice y desarrollo de dichos objetivos.

I. En la dimensión política

A. **Construir una política de alianzas amplia, plural y efectiva:** Nuestra política de alianzas debe elaborarse en función de los objetivos que nos trazamos. El actual escenario político obliga a abrirse a alianzas amplias y plurales para lograr ser efectivos.

a. **Formar un arco de oposición capaz de frenar los retrocesos planteados por el ejecutivo y diluir su mayoría social y política circunstancial:** El primer objetivo de la política de alianzas del FA debe ser formar una oposición efectiva, que sea capaz de frenar los retrocesos que plantea el gobierno, diluir su mayoría circunstancial y tensionar sus filas internas. Para cumplir dicho objetivo se requiere:

i. **Apertura con fuerzas que trascienden la coalición de la candidatura de Jeannette Jara:** Lograr mayorías en ambas cámaras mediante el acercamiento a sectores independientes, el PDG y fuerzas que puedan estar tensionadas dentro del actual oficialismo.

ii. **Impugnar ciertas premisas económicas y de seguridad del oficialismo:** Debemos desmontar los diagnósticos errados que levantó la ultraderecha en campaña a través de, por ejemplo, impugnar la tesis de que rebajar impuestos a los más ricos genera crecimiento y defender que la lucha contra el crimen organizado requiere un Estado fortalecido, no debilitado.

iii. **Identificar e impulsar iniciativas de apoyo transversal:** Debemos impulsar agendas, incluyendo algunas medioambientales o de sentido común como la eutanasia, que puedan concitar apoyo incluso en sectores del oficialismo, permitiendo que el país avance en materias donde el Ejecutivo no tiene una posición monolítica.

b. **Consolidar una alternativa política que convoque a una mayoría social de largo aliento:** Articular una fuerza política basada en la coalición del Gobierno del Presidente Boric que ofrezca un proyecto de país capaz de movilizar a la sociedad más allá de lo electoral. Este objetivo busca dotar de contornos claros a nuestra propuesta para convertirla en la opción preferente

de la ciudadanía frente al modelo regresivo. Para ello se requiere:

- i. **Convocar a sectores sociales que optaron por la actual administración en segunda vuelta:** Comprender los motivos y dolores reales detrás de dicho voto para ofrecer respuestas materiales superiores desde el progresismo.
- ii. **Desplegar una oposición proactiva y propositiva:** Ser una oposición proactiva implica ser ágiles y efectivos en levantar respuestas a las urgencias que el país sufre y las desigualdades del modelo de desarrollo vigente. Esto implica también estar disponibles para dialogar entre las propuestas nuestras y las del ejecutivo, sin caer en la oposición por la oposición, siempre mirando a la sociedad y sus urgencias.
- iii. **Fortalecer la unidad de la coalición que respaldó al Presidente Boric:** Transformar los lazos y la lealtad construida durante la gestión anterior en una estructura de colaboración política estable, diversa y con vocación de mayoría.

- c. **Articular una alianza estratégica con sectores sociales y productivos para un desarrollo compartido:** Establecer puentes de diálogo y colaboración tanto con los movimientos sociales como con aquellos sectores empresariales que comprendan que se requiere una ruta más sólida, estable y efectiva hacia el desarrollo. El objetivo es convocar a los actores que ven en la cohesión social, la sostenibilidad y la inversión estratégica los pilares de una

prosperidad nacional de largo plazo. Para ello se requiere:

- i. **Promover una alianza por la estabilidad y el crecimiento inclusivo:** Generar espacios de trabajo con sectores productivos que reconozcan que la seguridad social y el fortalecimiento del Estado son condiciones habilitantes para un mercado dinámico y sano.
- ii. **Demostrar la eficacia del modelo progresista frente a la desregulación:** Posicionar nuestra agenda como el camino más viable para alcanzar el desarrollo, contrastando nuestra capacidad de dar certezas institucionales frente a la incertidumbre y polarización que proponen las agendas de retroceso.
- iii. **Integrar las demandas sociales con la planificación económica:** Asegurar que el proyecto político sea capaz de sintetizar las urgencias de los sectores populares con una estrategia de crecimiento que distribuya las ganancias de la productividad de manera justa.

- B. **Apoyar el despliegue político y de gestión desde los gobiernos locales para demostrar la factibilidad de la alternativa política:** Diseñar un plan de respaldo técnico y político para que los municipios y concejalías del Frente Amplio operen como referentes prácticos de nuestra alternativa de bienestar. El objetivo es mostrar que la gestión progresista es eficiente, moderna y responde mejor a las necesidades cotidianas que el programa del actual Ejecutivo. Para esto se requiere:

- a. **Respaldo técnico-político a municipios frenteamplistas:** Facilitar herramientas para que las alcaldías y concejalías demuestren la viabilidad de políticas públicas transformadoras en el territorio.
 - b. **Articulación estratégica entre lo local y nacional:** Asegurar que la gestión en los barrios se alinee con la estrategia política de oposición, desmontando falsos diagnósticos y mostrando resultados concretos.
- C. **Reforzar alianzas internacionales para la construcción de un internacionalismo efectivo y útil para el siglo XXI:** Impulsar relaciones internacionales que fortalezcan la capacidad de respuesta del país ante los cambios globales, mediante la articulación con partidos de izquierda y progresistas, especialmente a nivel regional, para enfrentar desafíos comunes de seguridad y economía. Para cumplir este objetivo se requiere:
- a. **Elaborar en conjunto con fuerzas internacionales** propuestas concretas de políticas públicas para fortalecer una agenda de seguridad, estabilidad regional y cobro efectivo de tributos a los grandes contribuyentes y patrimonios globales.
 - b. **Construir un sistema de intercambio de experiencias** con gobiernos progresistas, para conocer las experiencias concretas de iniciativas progresistas en otros lugares.

para ofrecer un proyecto político robusto y de largo aliento.

- a. **Formular un proyecto político de largo plazo para el desarrollo de Chile:** Elaborar colectivamente el horizonte político del Frente Amplio, que pueda ofrecer estabilidad, solidaridad, libertad y desarrollo social y económico a nuestra nación. Este modelo de desarrollo se sostiene en la sinergia estratégica entre el mundo social, el sector público y privado, potenciando la planificación, la innovación y el aprovechamiento de nuestros recursos estratégicos para consolidar una red sólida de derechos sociales. El horizonte de bienestar que el Frente Amplio debe construir colectivamente debe otorgar certezas institucionales de bienestar material, libertad personal y progreso económico para todas y todos.
- b. **Construir respuestas efectivas a las urgencias materiales de la población:** Durante el gobierno del Presidente Boric se avanzó significativamente en las agendas de seguridad, con más de 70 leyes aprobadas y un incremento presupuestario de casi 17%, que contrastó con la reducción del periodo anterior, y económicas, destacando la ley de modernización de permisos y la Estrategia Nacional del Litio. Sin embargo, dado que ambas áreas siguen siendo prioridades centrales de la ciudadanía, el partido debe elaborar propuestas concretas que, desde una óptica progresista, definan una hoja de ruta de corto y mediano plazo para estas temáticas.

II. En la dimensión ideológica

- A. **Consolidar la propuesta política del Frente Amplio como proyecto de país para las próximas décadas:** A diez años de nuestra fundación como coalición y en el marco de nuestro primer congreso como partido único, debemos sintetizar los aprendizajes acumulados

c. **Impulsar una visión de Estado moderno para el siglo XXI con apalancamiento supranacional y en gobiernos locales:**

Debemos elaborar una propuesta para superar el modelo estatal del siglo XX mediante una modernización profunda que lo vuelva ágil, fuerte y efectivo. Esta visión incorpora un internacionalismo de políticas públicas concretas para resolver desafíos que trascienden fronteras, al estilo de la cooperación europea o climática, y refuerza la capacidad de los gobiernos locales y regionales para ser motores de soluciones productivas y sociales. Se requiere un Estado que no solo administre, sino que planifique y coordine de manera efectiva en todos sus niveles para garantizar el bienestar de la población.

d. **Posicionar el legado del Gobierno del Presidente Boric como la prueba de una alternativa viable:** Debemos defender el legado del gobierno del Presidente Boric no como un ejercicio de autocomplacencia, sino como la defensa de avances materiales para la sociedad y como prueba de que existe una alternativa al individualismo extremo y al desmantelamiento de los avances sociales propuesto por la restauración conservadora.

B. **Disputar el sentido común frente a la hegemonía de los relatos conservadores:** Debemos desarrollar narrativas que resignifiquen conceptos clave como la libertad, la seguridad y la solidaridad desde una perspectiva progresista. El objetivo es instalar en el debate público que los grandes dolores

de la sociedad no se resuelven con menos Estado o más aislamiento, sino con mayor igualdad, protección colectiva y un fortalecimiento de los vínculos sociales. La disputa ideológica central radica en convencer a las mayorías de que el bienestar individual solo es sostenible dentro de un marco de justicia y estabilidad común.

C. **Desarrollar un proyecto internacionalista cooperativo para resguardar el derecho internacional y garantizar la estabilidad regional:**

Nuestra vocación internacionalista debe evolucionar hacia un cooperativismo ambicioso que convierta la política exterior en una piedra angular del proyecto país. Buscamos contribuir en una agenda global que resguarde el derecho internacional y en mayor cooperación regional, que garantice la estabilidad política y económica. Debemos avanzar en rutas de cambio que permitan resolver colectivamente urgencias comunes como la crisis climática, los fenómenos migratorios y la justicia tributaria. Este internacionalismo del siglo XXI es, en última instancia, una herramienta para proteger la soberanía y el bienestar de las y los trabajadores chilenos en un mundo interconectado.

III. En la dimensión social

A. **Recuperar inserción de los movimientos sociales:**

Los movimientos sociales son un pilar de nuestra fuerza como proyecto de izquierda, cuya organización y lucha fue fundamental en las décadas recientes para develar los abusos del modelo neoliberal y abrir camino a una alternativa. Muchas de las dirigencias del Frente Amplio vienen de las luchas educacionales, feministas, del trabajo, medioambientales, de las diversidades, de los pueblos indígenas, regionalistas y tantas otras más. Debemos recuperar nuestro trabajo en y

junto a los movimientos sociales, desde la posición que hoy implica ser un partido político unificado y haber liderado un gobierno. Esto es posible a través de un diálogo fraterno, poniendo a disposición las experiencias técnicas y políticas adquiridas estos cuatro años para fortalecer la organización de base. También es nuestra tarea elaborar nuestras propuestas programáticas relacionadas con las agendas de estos movimientos, que sean coherentes con el proyecto histórico que proponemos al país, para construir a partir de ello un intercambio que sea fraterno y fructífero con los movimientos sociales.

B. Construir donde el pueblo de Chile se está organizando: La fuerza para transformar la realidad reside en la sociedad organizada, pero en ocasiones esta organización se manifiesta en temáticas y espacios que han sido ajenos a la izquierda tradicional. El desafío estratégico del Frente Amplio es estar presente allí donde el pueblo hoy resiste la inseguridad y la mercantilización de la vida, disputando el sentido común con argumentos, evidencia y nuestra agenda de igualdad.

Para cumplir este objetivo se requiere hacerse presentes en los comités barriales de seguridad, donde vecinas y vecinos se organizan ante la delincuencia, ofreciendo una alternativa progresista y técnica frente a las soluciones punitivas de la ultraderecha. Debemos participar de movimientos como "No + TAG", entendiendo que no son sólo demandas que chocan con la planificación ecológica y desarrollo de infraestructura pública, sino como luchas de trabajadores y pequeñas empresas contra el encarecimiento de la vida. Es necesario reconocer y potenciar la articulación en espacios rurales, como en los Comités de Agua Potable Rural (APR), comunidades indígenas y

organizaciones campesinas que defienden el territorio y la soberanía alimentaria, sectores clave que han sido históricamente postergados.

C. Promover la articulación de los actores sociales: Junto con fortalecer nuestra participación en las organizaciones sociales, como partido debemos fortalecer la articulación de los actores sociales en referentes nacionales, tanto dentro de un mismo ámbito (así como los estudiantes tienen la Confech), como entre distintos movimientos nacionales, a modo de construir mayor fuerza y articulación para defender las agendas que tenemos en común.

D. Promover la internacionalización de los actores sociales, compartiendo experiencias y lazos. El partido debe usar sus redes internacionales para favorecer la articulación e intercambio de experiencias entre movimientos sociales, al igual que participar y fortalecer las redes que los propios movimientos ya han construido.

E. Mayor pluralismo en los medios de comunicación. Patente ha quedado para todos la falta de pluralismo que existe en los medios de comunicación en Chile. Esto excede el problema de que no existe un medio de comunicación "del Frente Amplio", y afecta las condiciones mismas del ejercicio del periodismo en Chile, un componente ineludible de cualquier sociedad democrática. El Frente Amplio debe enfrentar como una centralidad estratégica que afecta las condiciones mínimas de la política democrática el déficit de pluralismo en los medios de comunicación y construir propuestas y alianzas para contribuir a levantar y sostener alternativas en todas las plataformas de información vigentes.

F. Estrategia de comunicación digital. Las redes sociales y las distintas

herramientas de comunicación digital han transformado la comunicación social y política para siempre. Desafortunadamente, la ultraderecha ha copado estas herramientas para azuzar el odio con mentiras, aprovechando la cultura de la inmediatez y efectividad que generan. Nosotros no podemos restarnos de este campo estratégico de la comunicación social, debiendo aprender su lenguaje, pero también reponiendo las tecnologías de la información y comunicación como herramientas con un altísimo potencial para articular y movilizar descentralizadamente a la sociedad civil.

IV. En la dimensión partidaria

A. **Consolidar orgánica y políticamente el partido unificado.** El paso de la unificación partidaria ha sido fundamental en dotarnos de una herramienta de la masividad y alcance necesario para liderar a la oposición, enfrentar a la ultraderecha y construir un proyecto de desarrollo para los desafíos que vive el Chile actual. En ello, el Congreso Ideológico y Estratégico del Frente Amplio es una instancia fundamental para seguir creciendo en nuestra unidad política. Sin embargo, todavía queda trabajo importante que realizar en fortalecer nuestra articulación como fuerza política en todos los niveles de acción del partido. De ahí la necesidad de continuar y ampliar el trabajo de la actual directiva en la articulación y coordinación con todas las autoridades del partido a nivel país: parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Este acompañamiento y articulación también debe darse a nivel de regionales, comunales y frentes, para fortalecer su capacidad de cumplir los objetivos de inserción territorial y social aquí propuestos. Esto implica necesariamente aumentar las

capacidades orgánicas al interior del partido.

B. **Implementar un sistema permanente de formación de cuadros políticos para los desafíos del periodo.** Los objetivos políticos y estratégicos planteados aquí deben acompañarse de una formación política, ideológica y técnica que permita a todo el partido contribuir a ellos. Nuestra capacidad para aumentar la inserción social, construir política de forma colectiva y potenciar nuevos liderazgos frenteamplistas depende directamente de este esfuerzo. Por ello, implementar un sistema permanente de formación es una tarea fundamental para que la política del partido sea más eficaz, logrando que sus definiciones se materialicen a través de nuestras dirigencias en todo el país.

Los cuadros políticos son militantes con la formación necesaria para proyectar las definiciones y directrices del partido en sus territorios, asegurando una bidireccionalidad efectiva que permita traducir las urgencias sociales al lenguaje de la política pública y viceversa, fortaleciendo así orgánica y políticamente al Frente Amplio desde la realidad de las mayorías. La construcción de un proyecto socialista y profundamente democrático requiere militantes con capacidad de análisis y perspectiva crítica, capaces de tomar decisiones que, respetando los acuerdos partidarios, enfrenten la realidad con una mirada audaz y transformadora.

C. **Construir una estrategia para convocar y habilitar formas de participación para militantes inscritos en el partido que aún no encuentran espacios de participación.** Si bien hoy somos el partido más grande de Chile, hay muchos militantes de nuestras filas que aún no han encontrado canales o los espacios adecuados para aportar con el partido. Por ello, creemos que un objetivo

fundamental es mapear a todos estos militantes y construir, junto con ellos, espacios y herramientas adecuadas para que puedan aportar al partido en distintas dimensiones dependiendo de sus propios tiempos, condiciones y capacidades. Lo anterior responde a la comprensión de que exigir una militancia uniforme es restringir y debilitar la organización de nuestro partido. Se debe evitar encasillar a la militancia en un patrón único, imaginando una organización que integre a diversos tipos de acción política.

- D. **Diseñar la estrategia electoral para el ciclo 2028-2029.** El resultado observable del éxito del objetivo aquí planteado, es que en cuatro años más, las fuerzas de izquierda y progresistas, ojalá lideradas por el Frente Amplio, vuelvan a ser gobierno, con un proyecto país de transformaciones sólido y conectado con las urgencias de la mayoría del país. Este resultado debe empezar a prepararse desde ya, construyendo un equipo de trabajo que analice la situación de todas las comunas, distritos, circunscripciones y regiones y proponga

una estrategia de crecimiento y proyección de liderazgos de cara al ciclo electoral 2028-2029.

Esperamos desde el Comité Central del Partido que la discusión en el marco del primer Congreso del Frente Amplio nos permita salir con unidad y una lectura compartida del período, de la cual se desprendan con claridad objetivos políticos y estratégicos para el avance de un proyecto que entregue esperanzas y certezas al pueblo chileno. Nuestra diversidad de trayectorias políticas, ideológicas y sociales constituyen la amplitud y riqueza de un proyecto de izquierda y progresista robusto, que desde una perspectiva socialista y democrática se debe hacer cargo de los desafíos y anhelos del presente con perspectiva de futuro.

Asumamos este compromiso con la responsabilidad que demanda el momento histórico, levantando alternativa política transformadora desde cada rincón de nuestro país.

Con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza.



COMITÉ CENTRAL

